



Desalojo e incendio de Chinatown durante la pandemia de peste, Honolulu, Hawái, 1900

La vivienda, la salud, nuestros cuerpos y nuestras relaciones con el espacio están entrelazados, como una trenza o las hebras del ADN. Estas hebras, y cómo se enroscan unas en torno a otras, revelan mucho sobre los sistemas sociales, políticos y económicos de Estados Unidos. Al hacerlo, delatan cuáles cuerpos, hogares y lugares se salvaguardan y cuáles quedan despojados. [Leer más]

La historia de la vivienda en Estados Unidos encierra una historia más amplia de desplazamiento y despojo. Los pueblos indígenas se vieron obligados a abandonar sus hogares y comunidades a medida que los colonos extendían su presencia por la región.

El siglo XIX en Estados Unidos se caracterizó en gran medida por la expansión hacia el oeste y la industrialización, procesos que impulsaron un crecimiento económico y demográfico urbano y perpetuaron con el desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas.

El crecimiento económico y demográfico masivo también se vio impulsado por la explotación de los pueblos esclavizados, quienes fueron llevados a la fuerza a Estados Unidos para producir y procesar los materiales que alimentaron la industrialización y el comercio mundial.

Los estados se beneficiaban directamente de la venta de personas esclavizadas y de las mercancías que producían, así como de los impuestos sobre el propio comercio de esclavos. Es más, los bancos concedían hipotecas que trataban a las personas esclavizadas como garantía del préstamo (Murphy, 2023). En algunos estados del sur, los bancos de las plantaciones se financiaban en parte mediante la venta de bonos a inversores, incluidos magnates ricos del norte. La Proclamación de Emancipación de 1863 y la 13ª Enmienda a la Constitución estadounidense abolieron el tratamiento legal de las personas esclavizadas como propiedad y negaron a los esclavistas cualquier compensación por la pérdida de “propiedad” como resultado de la emancipación.

La muerte masiva entre las poblaciones indígenas de Norteamérica se ha atribuido a menudo a la propagación de enfermedades infecciosas introducidas por los colonos europeos. Sin embargo, estas enfermedades no se propagaron por sí solas: el desalojo y despojo de los pueblos indígenas de sus tierras y hogares crearon las condiciones que facilitaron la proliferación de estos patógenos, provocando una morbilidad y mortalidad significativamente mayores de las que se habrían producido de otro modo (Ostler, 2019).

La esclavitud y el paludismo formaban un círculo vicioso: a finales del siglo XVII, la esclavitud introdujo en América la forma más peligrosa de paludismo, la malaria *falciparum*, y la propagó desde la costa oriental hasta las plantaciones del Sur. Las poblaciones indígenas—a las que los colonizadores intentaron obligar a trabajar en las zonas que se habían vuelto palúdicas—a menudo morían a causa de esta enfermedad, al igual que los trabajadores europeos libres y contratados. Esta situación aumentó la demanda de mano de obra, especialmente de individuos esclavizados procedentes de regiones de África donde la malaria *falciparum* era endémica, debido a su presunta resistencia innata al parásito, afianzando aún más el ciclo de trabajo forzado y enfermedad (Esposito, 2022).

El paludismo sólo se controló eficazmente en Estados Unidos después de que se abolieran los sistemas de esclavitud y apartheid y la Gran Migración permitiera a cientos de miles de personas abandonar el sur profundo, región plagada de mosquitos palúdicos (Humphreys, 2001).

A principios del siglo XX, los intentos de prevenir epidemias llevaron a la implementación de cuarentenas racistas y políticas de vacunación coercitivas, mientras que los códigos de construcción dieron lugar a “pactos raciales”.

En 1910, el alcalde de Baltimore, J. Barry Mahool, promulgó una ordenanza que prohibía a los residentes blancos y negros mudarse a bloques donde predominara la otra raza. Mahool justificó la ordenanza de la siguiente manera: “Los negros deben ser puestos en cuarentena en barrios marginales aislados para reducir los incidentes de disturbios civiles, evitar la propagación de enfermedades contagiosas a los barrios blancos cercanos y proteger el valor de la propiedad entre la mayoría blanca”. [Enlace de referencia](#)

Estas ordenanzas de zonificación racial se extendieron por todo el país hasta que el Tribunal Supremo falló en su contra en el caso *Buchanan vs Warley* (1917). En respuesta, los propietarios privados y los promotores y agentes inmobiliarios recurrieron a las restricciones a nivel de propiedad. Estos pactos racialmente restrictivos se incluían en las escrituras de propiedad, y limitaban quién podía comprar, alquilar o habitar la propiedad. No fue hasta el caso *Shelley vs Kraemer* (1948) que estos pactos fueron declarados inaplicables por violar la cláusula de igualdad de protección de la 14ª Enmienda.

En 1899, cuando la peste llegó a Honolulu, los residentes de Chinatown (el barrio chino de la ciudad) fueron desalojados de sus hogares, que los mismos fueron destinados a una “cuarentena controlada”. El Gran Incendio de Londres de 1666, que posiblemente contribuyó al retroceso de la peste en los años siguientes, sentó un precedente para el uso del fuego como medida de contención (Mohr, 2004). En Honolulu, sin embargo, solo Chinatown fue objeto de “tratamiento”. La quema “controlada” se descontroló rápidamente y el barrio quedó destruido.

Un año después, se detectó la peste en San Francisco. Al igual que en Honolulu, la Junta de Sanidad de la ciudad se centró en Chinatown, primero para una vacunación obligatoria con la vacuna experimental de Haffkine (McClain, 1988) y después mediante una cuarentena. El mandato de vacunación y la cuarentena fueron finalmente anulados en los tribunales, y el juez presidente del tribunal señaló que las medidas se habían administrado “con un mal ojo y una mano desigual” (McClain, 1988).

Tras la Segunda Guerra Mundial, la adopción masiva de automóviles estimuló la suburbanización entre las poblaciones blancas de clase media y trabajadora, quienes podían optar a hipotecas suscritas por el gobierno federal. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías—antibióticos e insecticidas—prometían una nueva era de control de las plagas domésticas y las enfermedades infecciosas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la planificación urbana se centró en la modernización de las ciudades centrales, en parte como respuesta a la preocupación por la salud y la seguridad públicas, la calidad de los edificios y la creciente presión que los automóviles ejercían sobre las infraestructuras. Estas mismas preocupaciones también impulsaron el desarrollo rápido de los suburbios, y el gobierno federal ayudó a los compradores cualificados—la mayoría de los cuales eran blancos—a obtener el capital necesario para adquirir viviendas en estas nuevas comunidades.

En cambio, los fondos federales financiaron la demolición y el desalojo de barrios enteros en las zonas céntricas de las ciudades. Los barrios seleccionados estaban habitados mayoritariamente por personas con bajos ingresos, minorías e inmigrantes.

Ni la expansión suburbana ni la renovación urbana beneficiaron a todos los residentes por igual. Los prestatarios minoritarios y de bajos ingresos se enfrentaban a importantes obstáculos para obtener hipotecas en urbanizaciones suburbanas, y las presiones sociales hacían que muchas de estas comunidades estuvieran fuera de su alcance. Mientras tanto, la renovación urbana reestructuró los barrios céntricos de las ciudades, intensificando la segregación etnoracial de facto y concentrando a los residentes minoritarios y los de bajos recursos en zonas dañadas por las mismas actividades industriales que habían impulsado el crecimiento urbano.

En los años 60, el libro *Primavera silenciosa* de Rachel Carson puso de relieve cómo la exposición ambiental a pesticidas peligrosos—incluidos los de uso doméstico—estaba relacionada con las enfermedades.

Durante el mismo periodo, el movimiento por los derechos civiles reivindicaba la necesidad de abordar las persistentes desigualdades sociales y económicas provocadas por el racismo explícito e implícito. El [Informe de la Comisión Kerner](#) (1967, examinó el “desorden racial” (disturbios raciales) que se estaba produciendo en ciudades de todo Estados Unidos y concluyó que “Nuestra nación avanza hacia dos sociedades, una negra y otra blanca—separadas y desiguales”.

Tras el asesinato del reverendo Dr. Martin Luther King Jr., la elevada presión social y política dio lugar a importantes reformas federales, entre ellas la Ley de Vivienda Justa de 1968, que prohibía explícitamente la discriminación en la vivienda por motivos de raza, sexo, orientación sexual y otras clases protegidas. Aunque estas nuevas leyes representaron un cambio importante para los consumidores y proveedores de vivienda, persistieron muchos de los retos presentes en un panorama de vivienda ya de por sí desigual.

En el punto álgido de la pandemia de COVID-19, los confinamientos transformaron los hogares en refugios contra la infección, pero el riesgo generalizado de desempleo hizo temer que una parte importante de la población no pudiera pagar el alquiler. En sus esfuerzos por detener el virus, ciudades, estados y el gobierno federal actuaron en materia de la vivienda, aprobando leyes para frenar los desahucios, poniendo de relieve la conexión entre la vivienda y la salud, al menos temporalmente.

El SARS-CoV-2 se propaga fácilmente dentro de los hogares (Li, 2021), y los desalojos pueden aumentar el tamaño de los hogares, ya que los afectados a menudo se ven obligados a mudarse con amigos o familiares. Este desahucio de habitantes incrementa el riesgo de infección tanto entre los afectados por el desahucio como entre la población en general. Las moratorias de desalojo aprobadas a nivel municipal, estatal y federal probablemente previnieron miles de infecciones y muertes, especialmente en el periodo anterior a la disponibilidad de una vacuna eficaz (Nande, 2021).

El 1 de septiembre de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron la “[Suspensión temporal de los desalojos residenciales para prevenir una mayor propagación del COVID-19](#)”. La justificación de los CDC se basaba en la idea de que impedir los desahucios era “una medida eficaz de salud pública utilizada para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles.”

En última instancia, la moratoria federal de desahucios fue anulada por el Tribunal Supremo, no porque se considerara ineficaz, sino en virtud de una interpretación jurídica restrictiva de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944. La ley facultó al Cirujano General (y posteriormente a los CDC) para “prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades transmisibles”. En esencia, la ley se centra en el despojo, permitiendo al gobierno federal llevar a cabo “la inspección, la fumigación, la desinfección, la higienización, la exterminación de plagas, la destrucción de animales o artículos que se determinen estar infectados o contaminados de tal modo que constituyan fuentes de infección peligrosa para los seres humanos”, seguido de una coma y la frase: “y otras medidas que, a su juicio, puedan ser necesarias”. El Tribunal concluyó que las “otras medidas” deben referirse específicamente a los animales o artículos infectados, no la vivienda.

La interpretación restrictiva del Tribunal Supremo de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 limita la autoridad del gobierno federal para controlar las enfermedades mediante la política de vivienda. De hecho, si el gobierno federal sólo puede actuar sobre los artículos e individuos que se consideren infecciosos, no está claro cómo puede llevar a cabo la vigilancia de los agentes infecciosos que están surgiendo, o que puedan hacerlo en el futuro.

La [Ley del Plan de Rescate Estadounidense](#) de 2021 proporcionó a los gobiernos estatales y locales más de 350.000 millones de dólares en financiación flexible para el desarrollo de soluciones que aborden las dificultades interconectadas de la salud pública, la inestabilidad de la vivienda y otros problemas relacionados con la recuperación socioeconómica tras la pandemia. La eficacia de las subvenciones de emergencia ha provocado un aumento en el número de iniciativas centradas en ayudas económicas permanentes o una renta básica. Este enfoque se basa en la comprensión de que la inseguridad económica contribuye considerablemente a la inestabilidad de la vivienda, el desplazamiento y los problemas crónicos de salud (Doussard, 2024).

Bibliografía

- Biehler, Dawn Day. “Permeable homes: A historical political ecology of insects and pesticides in US public housing”. *Geoforum* 40, núm. 6 (2009): 1014–1023.
- Conis, Elena. *How to Sell a Poison: The Rise, Fall, and Toxic Return of DDT*. Bold Type Books, 2022.
- Doussard, Marc. “Seeding policy: Viral cash and the diverse trajectories of basic income in the United States”. *International Social Security Review* 77, núm. 1-2 (2024): 85–101.
- Esposito, Elena. “The side effects of immunity: Malaria and African slavery in the United States”. *American Economic Journal: Applied Economics* 14, núm. 3 (2022): 290–328.
- Humphreys, Margaret. *Malaria: Poverty, Race, and Public Health in the United States*. JHU Press, 2001.
- Li, Fang, Yuan-Yuan Li, Ming-Jin Liu, Li-Qun Fang, Natalie E. Dean, Gary W.K. Wong, Xiao-Bing Yang et al. “Household transmission of SARS-CoV-2 and risk factors for susceptibility and infectivity in Wuhan: A retrospective observational study”. *The Lancet Infectious Diseases* 21, núm. 5 (2021): 617–628.
- McClain, Charles. “Of medicine, race, and American law: The bubonic plague outbreak of 1900”. *Law & Social Inquiry* 13, núm. 3 (1988): 447–513.
- Mohr, James C. *Plague and Fire: Battling Black Death and the 1900 Burning of Honolulu's Chinatown*. Oxford University Press, 2004, p. 89.
- Murphy, Sharon Ann. *Banking on Slavery: Financing Southern Expansion in the Antebellum United States*. University of Chicago Press, 2023.
- Nande, Anjalika, Justin Sheen, Emma L. Walters, Brennan Klein, Matteo Chinazzi, Andrei H. Gheorghie, Ben Adlam et al. “The effect of eviction moratoria on the transmission of SARS-CoV-2”. *Nature Communications* 12, núm. 1 (2021): 2274.
- Ostler, Jeffrey. *Surviving Genocide: Native Nations and the United States from the American Revolution to Bleeding Kansas*. Yale University Press, 2019.